

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: CAMILO ESTEBAN MORENO
DEMANDADO	: CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN Y JS CONSTRUCTORA S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO LABORAL (IMPEDIMENTO)
RADICADO NACIONAL	: 05001-31-05-019-2023-00293-01
RADICADO INTERNO	: 272-23
DECISIÓN	: DECLARA INFUNDADA CAUSAL DE IMPEDIMENTO.
ACTA NÚMERO	: 326

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para resolver la decisión del Juzgado diecinueve laboral del circuito de no aceptar CAUSAL DE IMPEDIMENTO propuesta por la juez dieciocho laboral de circuito

ANTECEDENTES

Pretensiones

En el proceso ordinario laboral antes descrito, la sra. Juez que preside el Juzgado dieciocho Laboral del Circuito de Medellín se declara impedida para continuar con el conocimiento del asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 y 141 N° 6 del Código General del Proceso.

Por su parte el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 04 de septiembre de 2023 ordenó la remisión del expediente a esta corporación a fin de que se resolviera el impedimento por este formulado bajo el entendido de que no existe el mismo.

Por lo anterior procede este tribunal a resolver con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES

La competencia para conocer del asunto está dada por el artículo 140 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual establece que:

“DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS. Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.

El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva.

Si el superior encuentra fundado el impedimento enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido. Si lo considera infundado lo devolverá al juez que venía conociendo de él.

(...)

El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no admiten recurso”.

Ahora, según lo expuesto entre otras en sentencia T 305 de 2017, “*las figuras de impedimentos y de recusaciones se diferencian una de la otra en función de si es el juez o uno de los intervinientes el que pone en duda la imparcialidad del juzgador para resolver el proceso. Así, el impedimento tiene lugar cuando es el propio juez quien formula dicho cuestionamiento y lo pone a consideración del competente. En cambio, la recusación se da cuando alguno de los sujetos procesales alega la falta de idoneidad del funcionario para dirigir el proceso”*

Con la finalidad de preservar la transparencia e imparcialidad de los juzgadores al momento de decidir los asuntos sometidos a su consideración, se establecieron por el legislador las causales taxativas de recusación relacionadas para el caso en el artículo 141 del C. G. del P., que a la vez sirven de fundamento para declaratoria de impedimento, explicándose por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que estos:

“(…) fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, animadversión o amor propio del juzgador (...) Según las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo

del principio de la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad jurídica.” (CSJ ATC, 8 abr. 2005, rad. 00142-00, citado el 18 ago. 2011, rad. 2011-01687). (Subraya de la sala).

Precisándose por la misma Corporación que: *las causales de impedimento, similares en el instituto de la recusación, (...) ostentan naturaleza taxativa, restrictiva, limitativa y son de interpretación estricta sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analogía legis o iuris* (CSJ. AC de 19 de enero de 2012, rad. N° 00083, reiterado en AC2400 de 2017, rad. N° 2009-00055-01).

Con respecto a los impedimentos y recusaciones como garantía de independencia e imparcialidad del funcionario judicial en sentencia C-496 de 2016 se ha expuesto lo siguiente:

*“4. La jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial **forman parte del debido proceso** y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía⁽³²⁾.*

(...)

*La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes términos: “[la] **independencia**, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, [...] a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales”. **Sobre la imparcialidad**, ha señalado que esta “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (C.P., art. 13), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”⁽³⁴⁾.*

Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noción de imparcialidad, una doble dimensión: (i) subjetiva, esto es, relacionada con “la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”; y (ii) una dimensión objetiva, “esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto”⁽³⁵⁾. No se pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelanta, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue⁽³⁶⁾”⁽³⁷⁾.

(...)

En suma, los impedimentos y las recusaciones son herramientas orientadas a la protección de principios esenciales de la administración de justicia como

la independencia y la imparcialidad del funcionario judicial. Estos atributos en cuanto se dirigen a garantizar el debido proceso, tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Carta y en los principales convenios internacionales sobre Derechos Humanos adoptados por el Estado colombiano, y se convierten en derechos subjetivos del ciudadano”.

Así mismo, la jurisprudencia especializada laboral frente al particular ha indicado: (CSJ. AL1370 del 11 de abril de 2019, rad. N° 41511)

“... la declaratoria de impedimento **procede de forma restringida, en el entendido que es dable predicarlo solo cuando se ve comprometida la imparcialidad del operador judicial.**

Es decir, no por cualquier circunstancia puede excusarse al servidor público de ejercer su competencia, de allí que resulta obligado para el funcionario que se declara impedido o para el recusante, ceñirse a los supuestos previstos en las causales taxativamente enumeradas por el legislador, a fin de que la separación de aquel no sea caprichosa, sino producto de la aplicación rigurosa de una excepción al deber legal que le es propio.

*En consecuencia, debe indicar con precisión en cuál de ellas apoya su solicitud y expresar **con claridad las razones que lo llevan a pedir la separación del caso, con indicación de su alcance y contenido.** La falta de motivación o si esta es insuficiente, puede llevar a su rechazo, lo que ocurre cuando se acude a un enunciado genérico y abstracto.”*

Ahora, el Art 141 del CGP, aplicable por remisión expresa del CPTSS, reza:

*“Son causales de recusación las siguientes:
(...)*

*6. **Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado”.***

Partiendo de lo anterior conforme a la jurisprudencia en cita y haciendo la interpretación más plausible, entiende la sala que no existiría impedimento en el conocimiento del proceso de la referencia a pesar del hecho “...que quien actúa como apoderado judicial de la parte demandante, es el mismo apoderado que representa los intereses del cónyuge de la titular de este despacho”. Lo anterior porque el precepto normativo se refiere a la figura del pleito pendiente entre el cónyuge de la Sra. juez y el apoderado del presente proceso, situación que no se presenta, pues el apoderado Dr. Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz, es el apoderado del cónyuge de la Sra. Juez en un proceso diferente adelantado en el juzgado noveno laboral del circuito, iniciado en el año 2016, que no cumple con los requisitos exigidos que se dé la figura jurídica del pleito pendiente, a pesar de existir un proceso en curso, o existe la identidad de partes, la identidad de objeto (pretensiones distintas) y la identidad de causa.

Como con los impedimentos se debe proceder de forma restringida, en el entendido que es dable predicarlo solo cuando se ve comprometida la imparcialidad del operador judicial, en el presente caso, carece de argumento el impedimento presentado por la Juez dieciocho Laboral del Circuito, por la inexistencia de un pleito pendiente, por ende, deberá seguir conociendo del presente proceso en virtud de la no aceptación del impedimento.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR infundada la causal de impedimento invocada por el Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por CAMILO ESTEBAN MORENO contra CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN Y JS CONSTRUCTORA S.A, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del presente proceso al Juzgado Dieciocho laboral de Medellín, quien deberá conocer del presente proceso conforme lo dicho en esta providencia.

TERCERO: Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los Magistrados,


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ


HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 187 del 01 de noviembre de 2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>